

CA Santiago

Santiago, veinticinco de septiembre de dos mil veinticuatro.

**Vistos y teniendo presente:**

**Primero:** Que comparece Marcelo Chandía Peña, abogado, procurador fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco del Chile y de la Subsecretaría de Educación, e interponer reclamo de ilegalidad conforme a los artículos 28 y 29 de la Ley N° 20.285 en contra de la decisión adoptada por el Consejo Para la Transparencia, respecto del Amparo Rol C9625-23, acordado por su Consejo Directivo en sesión ordinaria N°1412 de 21 de diciembre de 2023, la que acoge parcialmente el amparo interpuesto por Sergio González Castro y requiere a la Subsecretaría de Educación lo siguiente:

“a).- Entregue a la persona solicitante información respecto a su proceso evaluativo 2022, esto es, copia de su portafolio y la rúbrica usada para su corrección, nombre de quien corrigió, su profesión y especialidad y prueba de conocimientos específicos de tecnología 2022.

b).- Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia, que sanciona la no entrega oportuna de la información en la forma decretada, una vez que ha sido ordenada por resolución a firme, con multa de 20% a 50% de la remuneración correspondiente. Si la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, persistiere en su actitud, se le aplicará el duplo de la sanción indicada y la suspensión en el cargo por un lapso de cinco días.

c).- acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico [cumplimiento@consejotransparencia.cl](mailto:cumplimiento@consejotransparencia.cl), o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), acompañando todos los medios probatorios, de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.”



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: KVTZXQXCJRC

Expone que según lo el criterio de la Subsecretaría de Educación, expresado tanto en la Resolución Exenta N°4.451, del 23 de agosto de 2023, como en el Oficio Ord. N°4.501, del 26 de octubre de 2023, la atención del requerimiento en comento se encuentra dentro de las causales de denegación consideradas en la Ley de Transparencia, específicamente aquellas referidas en el artículo 21 N.º1 y 21 N.º2.

Precisa que este reclamo de ilegalidad se presenta solo respecto de la decisión del Consejo para la Transparencia en aquella parte que ordena la entrega de la evaluación de conocimientos específicos rendida el año 2022 por don Sergio González Castro, toda vez que su portafolio docente, rúbrica utilizada para la corrección e información de los correctores, será enviada por la Subsecretaría de Educación a la casilla de correo electrónico informada por el requirente en su solicitud inicial.

Solicita, en concreto, que se deje sin efecto el acto reclamado, y se declare que corresponde rechazar el amparo deducido en su oportunidad por don Sergio González Castro.

Expone, que la solicitud de información de 13 de julio de 2013, es del siguiente tenor: “Junto con saludar, me presento mi nombre es: Sergio Sebastián González Castro rut: 16.758.663-5, profesor de tecnología. Y uso este medio para solicitar información con respecto a mi proceso evaluativo 2022. Es decir, por este medio pido se me entregue mi portafolio y la rúbrica usada para su corrección nombre de quien corrigió, su profesión y especialidad, clase gradaba y prueba de conocimientos específicos de tecnología 2022. Es decir, todos los instrumentos que fueron utilizados en el proceso. Pues son fundamentales para mí”.

Luego, por Resolución Exenta N°4.451 de 23 de agosto de 2023 la requerida comunicó al solicitante que se denegaba la información pedida por considerar que se configuran las causales de los N°1 y 2 del artículo 21 de la Ley N°20.285, es decir, por estimar que la publicidad, comunicación o conocimiento de la información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido y los derechos de las personas.

Dada la complejidad del proceso evaluativo que se trata y el hecho de haberse recibido 198 solicitudes del mismo tenor, referente a



la prueba de conocimientos específicos rendida durante el año 2022 y los portafolios docentes del mismo año, estima que se configura la causal del artículo 21 N°1, letra c), de la Ley N° 20.285, es decir, atendido el volumen de información a recabar y revisar, traería como consecuencia la distracción indebida de los funcionarios de la División Jurídica de la Subsecretaría de Educación.

Agrega, respecto de la configuración de la misma causal, que se debe considerar la necesidad de rehacer o elaborar íntegramente el instrumento de medición o evaluación, pues en caso de acceder a lo solicitado, el organismo evaluador se vería obligado a tener que rehacer completamente el instrumento previsto para la evaluación, pues significa entregar las “preguntas ancla”, lo que técnicamente haría imposible contar con ellas para los instrumentos presentes y futuros, afectándose la validez, confiabilidad y comparabilidad de los resultados de la aplicación del instrumento. Además, alega que la Subsecretaría de Educación se vería obligada a tener que destinar tiempo no programado para la creación de las bases de licitación que permitan la elaboración de nuevas pruebas, y que el Ministerio de Educación no tiene considerada la licitación de la elaboración de instrumentos de manera anual, ya que implicaría dejar de realizar las actividades previstas y presupuestadas, afectando la programación en el gasto.

También alude a los retrasos que ha implicado para los procesos de evaluación la pandemia del COVID-19, que obligó a suspender los procesos de evaluación 2020, 2021 y 2022, acumulándose 83.000 profesionales, para ser examinados, respecto de los cuales, durante 2023, se utilizaran los instrumentos contemplados para los años anteriores, lo que hace imposible entregarlos al solicitante.

En cuanto a la causal para la denegación de información contemplada en el artículo 21 N°2 de la Ley N°20.285, es decir, que la publicación, comunicación o conocimiento de la información afecte los derechos de las personas, plantea que mantener la reserva de las pruebas permite asegurar un escenario equitativo a los docentes que las rinden, permitiendo asegurar que un grupo de docentes no será beneficiado o perjudicado, existiendo equidad en la evaluación, respetándose el derecho de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República. Si un



docente accede a preguntas que serán utilizadas en sus evaluaciones, puede indebidamente lograr mejores resultados y acceder, por tanto, a asignaciones de tramos más alto y una mejora en sus remuneraciones.

En cuanto a los motivos por los que se considera ilegal la decisión del Consejo Para la Transparencia, alega en primer término que, en lo referido a la causal de denegación del artículo 21 letra c) de la Ley N°20.285, la reclamada no motivó debidamente o suficientemente su determinación, pues entendió que la reclamante aludió genéricamente a situaciones hipotéticas que dificultarían el desempeño del servicio si se cumple con la entrega de la información, lo que demuestra que desatendió las alegaciones realizadas por la reclamante, en las que especificó concretamente la existencia de 198 solicitudes de idéntico tenor y como estas afectan gravemente procesos de evaluación que deben llevarse a cabo, generándose una distracción indebida de funcionarios del órgano reclamante. En síntesis, alega que no existe un análisis de lo expuesto tanto en la Resolución Exenta N°4451 como en el oficio ordinario N°4556, ambos de la Subsecretaría de Educación.

Estima, que la decisión del amparo de información materia de autos vulnera en forma manifiesta lo dispuesto en el literal b) del artículo 33 de la Ley de Transparencia, esto es, el principio de imparcialidad establecido en el artículo 11 de la Ley N°19.880, así como lo dispuesto en el artículo 41 del mismo cuerpo legal, ya que dicha decisión no expresa de forma fundada, clara y precisa, las razones por las cuales es procedente hacer entrega de la información.

Sobre la imposibilidad de que un órgano de la Administración del Estado reclame de ilegalidad sobre la base de la causal del artículo 21 N°1 de la Ley N°20.285, hace referencia a la sentencia de inaplicabilidad dictada por el Tribunal Constitucional en la causa Rol 14.434-2023, que declara la inaplicabilidad del artículo 28 de la Ley de Transparencia, pues se razona que la afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano es una causal constitucional de denegación al acceso a la información, del mismo rango que la afectación de derechos de las personas, la seguridad de la nación, el interés nacional, o el que una ley de quórum calificado declare, toda vez que el precepto no dispone ninguna jerarquía entre ellas, por lo



tanto, su restricción, al momento de considerar las causales por las cuales es posible deducir un reclamo de ilegalidad en esta materia, deviene inaplicable.

Finalmente, se refiere a la ilegalidad de la decisión de la reclamada en cuanto a haberse rechazado la invocación a la causal de denegación de información del artículo 21 N°2 de la Ley N°20.285.

Expone que el Consejo para la Transparencia únicamente se refiere a que la argumentación de la Subsecretaría de Educación se da a base de circunstancias meramente hipotéticas, pues parte de un supuesto que la información podría ser usada para mejorar las chances de una mejor evaluación en desmedro de terceros que no tengan acceso a ella, sin embargo, aquello se trata de una mera eventualidad que no puede quedar amparada en la norma citada.

Alega que la afectación de las funciones del órgano y de los derechos de las personas no es hipotética, sino que se concretiza en el momento mismo de la divulgación de la información, sin que se requieran supuestas desviaciones en el uso de la misma, pues que el acceso mismo a las evaluaciones solicitadas pone en mejor situación a quien detenta aquella información, en consideración a aquellos que no cuentan con ella.

En forma subsidiaria a todo lo anterior, en atención a que el perjuicio sobrepasa al beneficio de la entrega de estas preguntas, solicita que se acceda a la posibilidad de efectuar una entrega parcial de lo requerido, permitiendo a la Subsecretaría de Educación cumplir lo ordenado mediante la entrega de los instrumentos sin considerar las denominadas preguntas ancla, de modo tal de garantizar la integridad y eficiencia del sistema, el resguardo de la política pública en curso y el correcto uso de los recursos públicos.

**SEGUNDO:** Que, el Consejo para la Transparencia fue debidamente notificado del presente reclamo con fecha 22 de enero del presente año, mientras que el tercero solicitante de la información fue notificado mediante exhorto el 28 de febrero.

**TERCERO:** Que, evacuando informe David Ibaceta Medina, abogado, Director General del Consejo para la Transparencia, y solicita el rechazo del reclamo de ilegalidad en todas sus partes.



En síntesis, en primer lugar, plantea que la alegación consistente en que la entrega de la información solicitada afecta el cumplimiento de las tareas del órgano público, resulta improcedente por carecer este de legitimación activa conforme a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 28 de la Ley de Transparencia.

En segundo lugar, plantea que de todas maneras la causal recién referida no se configura, en cuanto no se acreditaron los presupuestos que la conforman, pues la entrega de la información solicitada no afecta el debido cumplimiento de las funciones de la Subsecretaría de Educación. En efecto, estima que la información requerida obra en poder de la solicitada, con el propósito de que dicha institución cumpla debidamente con la correcta ejecución de políticas públicas sobre mejoramiento de la calidad de la enseñanza impartida en establecimientos de educación que le fueron encomendadas; adicionalmente, dicha información constituye el antecedente y fundamento directo y esencial para la adopción de decisiones de autoridad relacionadas con el desarrollo de la carrera funcionaria docente, por lo que la información requerida detenta, en principio, un carácter eminentemente público, todo conforme al artículo 8 de la Constitución Política de la República, así como los artículos 5, 10 y 11 de la Ley de Transparencia.

Agrega, que el órgano sólo señaló situaciones hipotéticas o meras apreciaciones subjetivas respecto a una eventual afectación del proceso de evaluación que se aplicará en lo sucesivo y un perjuicio a terceros, el cual proyectan en un supuesto mal uso que de la información pretendida podría darse, respecto de lo cual no existe evidencia efectiva, considerando que las preguntas que fueron aplicadas en procesos anteriores y que, conforme indica la recurrida, se replicarán en lo sucesivo, ya fueron del alcance de los profesionales a quienes se les examinó utilizando dichos instrumentos. En tal sentido, el organismo no logró acreditar la afectación a su debido funcionamiento, de una manera presente o probable y con suficiente especificidad, a fin de que este Consejo pudiera estimar que los costos que la publicidad de la información provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría.



Plantea, que la reclamante no logró acreditar ni explicar pormenorizadamente cómo se afectaría concretamente el debido cumplimiento de sus funciones al proporcionar la información solicitada, pues ésta dice relación con la entrega de los instrumentos de conocimientos específicos y pedagógicos en el marco de la carrera docente, antecedentes respecto de los cuales no resultaron acreditados en el procedimiento los estándares establecidos por este Consejo para estimar como concurrente la reserva de instrumentos de evaluación, de modo que resulta imposible mantenerlos en reserva y al margen del control social del solicitante, ya que no se ha probado que efectivamente se vean entorpecidas las funciones de la Subsecretaría de Educación, de modo que respecto de lo solicitado, debe seguirse la regla general en materia de acceso a la información, esto es, la publicidad de la información que obra en poder de un órgano de la Administración del Estado.

En un tercer orden de ideas, plantea que la decisión recurrida, al ordenar la entrega de la información controvertida no afecta derechos de terceros, por lo que no se configura la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia. Señala que, teniendo en cuenta el núcleo esencial del derecho de la igualdad ante la ley, no es posible encontrar en el texto del reclamo de ilegalidad de autos, cualquier justificación razonable al respecto que explique cómo la publicidad de la información requerida en el amparo Rol C9625-23, ocasiona una lesión al derecho de igualdad ante la ley del profesorado que se somete al proceso de evaluación docente, considerando muy especialmente que el Sistema de Reconocimiento y Promoción del Desarrollo Profesional Docente, se compone de un proceso evaluativo integral, el cual busca reconocer la experiencia y la consolidación de las competencias y saberes disciplinarios y pedagógicos que los profesionales de la educación alcanzan en las distintas etapas de su ejercicio profesional, y de un procedimiento de progresión en distintos tramos, por lo que es imposible atribuir únicamente a la publicidad de un instrumento de evaluación requerido, la potencialidad de afectar el derecho a la igualdad ante la ley de los profesionales de la educación que se someten a referido sistema de Reconocimiento y Promoción. Agrega que el proceso de evaluación docente comprende una serie de



mediciones de carácter integral, mucho más amplias que la mera aplicación de las evaluaciones de conocimiento específico, extendiendo el alcance de ésta a la forma en la que el docente imparte sus clases, la forma en que éste planifica, evaluación de pares, autoevaluación, etc., todo lo cual, corresponde a aspectos cuyas mediciones y resultados, por su propia naturaleza, dependen única y exclusivamente de cada uno de los docentes evaluados; por lo que las alegaciones efectuadas por la recurrente, en relación a una supuesta afectación al principio de igualdad ante la ley, fundada en la publicidad ordenada por lo resuelto en la decisión recurrida, aparece como manifiestamente desproporcionada y desprovista de fundamento fáctico y jurídico.

En cuarto lugar, plantea que, en el presente caso, existe un evidente interés público comprometido en el acceso a la información solicitada, propiciando el control social respecto del cumplimiento de las políticas públicas en el mejoramiento de la calidad de la educación a través del desarrollo de la carrera docente, encomendadas al ministerio del ramo. En concreto, entiende que la evaluación busca fortalecer la profesión docente y contribuir a mejorar la calidad de la educación, lo que ratifica la importancia del control social en la materia, por lo que el Consejo estimó que ello configuraba un argumento complementario para desestimar la concurrencia de las causales de reserva invocadas en el procedimiento de amparo, esto es, aquellas contempladas en el Art. 21 N°1 y N°2 de la Ley de Transparencia.

Por último, señala que la decisión reclamada se encuentra debidamente fundada, no existiendo en la especie infracción al artículo 33 letra b) de la Ley de Transparencia, ni a los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, pues la decisión de amparo se pronunció sobre la totalidad de las cuestiones debatidas por la reclamante. Alega que la supuesta falta de fundamentación es planteada únicamente por no haberse acogido las diversas hipótesis planteadas para sostener el rechazo del amparo, es decir, una mera falta de conformidad con lo resuelto, lo que no puede ser sustento para que se alegue una deficiente o inexistente fundamentación de la decisión reclamada.

**CUARTO:** Que con fecha 25 de marzo de 2024, según consta a folio 13, se certificó que el tercero interesado, don Sergio González





Castro, no evacuó el traslado que le fuera conferido y que el plazo para hacerlo se encuentra vencido.

Por resolución de 27 de marzo del presente año, a folio 14, se ordenó traer los autos en relación.

**QUINTO:** Que, al resolver, se debe tener presente que el artículo 8° inciso 2° de la Constitución Política de la República establece el principio de publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen, estableciendo que sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.

Así, la Ley N° 20.285, Ley de Transparencia, en su artículo 4° señala que *“el principio de transparencia de la función pública consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley”*. A su turno, en su artículo 5°, consagra que *“en virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado*.

*Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas”*.

El mismo cuerpo normativo, consigna en su artículo 21, en lo que interesa, que: *“Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes:*



*1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente:*

*c) Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.*

*2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico.*

**SEXTO:** Que, asentado el marco normativo precedente, cabe señalar que no se encuentra discutido que don Luis Hernández Díaz presentó una solicitud de acceso a la información pública ante la Subsecretaría de Educación, requiriendo diversos antecedentes relacionados con su proceso de Evaluación Docente y Carrera Docente del año 2022.

Mediante Resolución Exenta N°4.451, del 23 de agosto de 2023, como en el Oficio Ord. N°4.501, del 26 de octubre de 2023, la Subsecretaría de Educación denegó el acceso a la información solicitada, fundándose en las causales de reserva establecidas en el artículo 21 N°1 y N°2 de la Ley de Transparencia.

La causal de reserva fue desechada por el Consejo para la Transparencia, que en la decisión de amparo estableció que no se había acreditado su procedencia, en relación a la distracción de funciones, de forma concreta, como tampoco respecto de la dificultad que se generaría en el cumplimiento de sus funciones de evaluación, pues se limitó a señalar situaciones hipotéticas o meras apreciaciones subjetivas sobre eventuales consecuencias de la entrega de información.

**SÉPTIMO:** Que, lo antes expuesto es relevante, toda vez que el artículo 28, inciso segundo, de la Ley de Transparencia prescribe que “Los órganos de la Administración del Estado no tendrán derecho a reclamar ante la Corte de Apelaciones de la Resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información que hubieren denegado, cuando la denegación se hubiere fundado en la causal del número 1 del artículo 21.”



Así, el reclamo de ilegalidad, en cuanto se asila en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, no puede prosperar, toda vez que el órgano público, en cuyo favor recurre el Consejo de Defensa del Estado, carece de legitimidad activa para reclamar por tal causal.

En nada altera lo expuesto, la circunstancia de haberse acogido por el Tribunal constitucional un requerimiento de inaplicabilidad en los autos Rol N°14.434-2023, que incide en una causa distinta a la de autos, toda vez que la acción de inaplicabilidad se dirige a impugnar preceptos legales concretos cuya aplicación produzcan efectos contrarios a la Constitución, en una causa determinada. Es por ello que se ha señalado que es una modalidad de control concreto de constitucionalidad de la ley, pues lo que se pretende es la inaplicabilidad de un precepto legal a un caso concreto por ser contrario a la Constitución.

En razón de lo anterior, la sentencia que se dicta tiene un efecto relativo solo respecto de la causa que motiva su pronunciamiento. Así, el inciso primero del artículo 92 de la ley Orgánica del Tribunal Constitucional, señala expresamente que *“La sentencia que declare la inaplicabilidad sólo producirá efectos en el juicio en que se solicite”*.

**OCTAVO:** Que, por otro lado, el reclamante esgrime la ilegalidad en que incurre el CPLT al desechar la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, que establece el secreto de la información en aquellos casos en que *“su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico”*. Tal causal además se contempla en el N° 2 del artículo 7 del Reglamento de la misma ley precisa que una de las causales de reserva de la información se verifica en el supuesto de que su publicidad, comunicación o conocimiento *“afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada, sus datos sensibles o derechos de carácter comercial o económico”*.

**NOVENO:** Que, respecto de esta causal, la reclamante realiza su argumentación, señalando que se afectan los derechos de los docentes, toda vez que de mantener la reserva de las pruebas permite



asegurar un escenario equitativo a los docentes que las rinden, permitiendo asegurar que un grupo de docentes no será beneficiado o perjudicado, existiendo equidad en la evaluación, respetándose el derecho de igualdad ante la ley y que si un docente accede a preguntas que serán utilizadas en sus evaluaciones, pudiendo indebidamente lograr mejores resultados y acceder, por tanto, a asignaciones de tramos más alto y una mejora en sus remuneraciones. Sin embargo, la decisión de amparo, descartó la alegación de afectación de las condiciones de igualdad ante la medición, puesto que no se acompañaron antecedentes suficientes para justificar una expectativa razonable de afectación o daño de los derechos de terceros.

En este aspecto, esta Corte comparte el razonamiento expuesto en la decisión de amparo, puesto que la argumentación para configurar la causal se basa en circunstancias meramente hipotéticas, toda vez que se esgrime que la información podría ser usada para mejorar la evaluación de quienes tengan acceso a ella, en desmedro de terceros que no tengan acceso a ella, siendo esto una mera eventualidad que carece de base que le permita al reclamante asilarse en la causal de reserva esgrimida, en tanto aquella requiere mayores estándares de certeza en la afectación, vinculados a específicos referidos en la norma, como lo es la seguridad, la salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico de un tercero, afectación que, en el caso de autos, no se configura en forma directa producto de la información ordenada otorgar.

**DÉCIMO:** Que, en este orden de consideraciones, cabe enfatizar que en relación con esta causal de reserva, el reclamante no señala concretamente la forma en que la entrega de la información inhabilitaría el sistema en su totalidad, más aún cuando conforme a lo dispuesto en el artículo 19 K del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del año 2005, la medición de los estándares de desempeño se realiza mediante una serie de instrumentos, siendo la evaluación de conocimientos, sólo uno de aquellos que se han predeterminado por la Administración para tal efecto.

**UNDÉCIMO:** Que, en consecuencia, al haberse establecido que la información cuya entrega se ordena por el CPLT, de conformidad al inciso segundo del artículo 5° de la Ley N° 20.285,



tiene el carácter público, pues se elabora con presupuesto público y obra en poder de la Administración, no se puede establecer que el órgano reclamado haya incurrido en un acto ilegal al acoger parcialmente el amparo de acceso a la información, toda vez que no se acreditó por parte de la Subsecretaría reclamante, la existencia de una causal de reserva que permitiera restringir la entrega de aquella, razón por la que el presente reclamo de ilegalidad debe ser rechazado.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 28 inciso 1º, 29 y 30 de la Ley N°20.285, se decide que:

Se **RECHAZA**, sin costas, la reclamación deducida por el Consejo de Defensa del Estado, actuando en representación del Fisco del Chile y de la Subsecretaría de Educación, dirigido en contra de la decisión adoptada por el Consejo Para la Transparencia, respecto del Amparo Rol C9625-23, acordado por su Consejo Directivo en sesión ordinaria N° 1.412, de 21 de diciembre de 2023 y comunicada por correo electrónico con fecha 26 de diciembre de 2023.

**Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.**

Redacción del Ministro Alejandro Rivera M.

**Rol Corte N° 24-2024 (Contencioso Administrativo)**

Pronunciada por la **Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago**, presidida por el ministro señor Alejandro Rivera Muñoz e integrada, además, por la ministra señora Sandra Araya Naranjo y la abogada integrante señora Claudia Candiani Vidal. No firma la abogada integrante señora Candiani, quien concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, por no encontrarse al momento de hacerlo.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: KVTZXQXCJRC

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Alejandro Rivera M., Sandra Lorena Araya N. Santiago, veinticinco de septiembre de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a veinticinco de septiembre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: KVTZXQXCJRC